



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

12-01

SECCIÓN: ACUERDOS

Of. 4134.

Cuernavaca, Morelos, a veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.

**SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN.**

P r e s e n t e.

En cumplimiento al acuerdo de esta misma fecha,
remito a Usted:

A. Original del juicio de amparo directo [REDACTED] en
doscientas dieciséis fojas, promovido por [REDACTED]
Valle, por propio derecho.

B. Toca civil [REDACTED] en ochenta y ocho fojas.

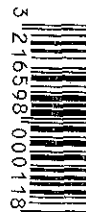
C. Expediente civil [REDACTED] en ochocientas
noventa y cuatro fojas.

D. Original y dos copias del escrito de agravios.

E. Disco que contiene la ejecutoria dictada el
dieciséis de abril de dos mil dieciocho, por este Tribunal,
Colegiado de Circuito.

Asimismo, se hace del conocimiento de nuestro
máximo tribunal del país, que en el fallo recurrido sí se analizaron
cuestiones de constitucionalidad.

Por otra parte, en cumplimiento a la circular 15/2014
AGP, el Secretario **certifica**: que la ejecutoria recurrida dictada en



3 216598 000118

sesión de **dieciséis de abril de dos mil dieciocho**, se notificó a la recurrente [REDACTED] el **catorce de mayo de dos mil dieciocho**, y el recurso de revisión se presentó en la Oficina de Correspondencia Común en los Tribunales Colegiados en Materia del Trabajo de este Circuito, el **veinticinco de mayo del año en curso**, con descuento de los días **diecinueve y veinte de mayo** del presente año, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo; lo cual se asienta para debida constancia legal.

Lo anterior, para lo que tenga a bien determinar en relación con el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa.

De manera atenta le solicito el acuse de recibo de estilo.

Respetuosamente.

**EL MAGISTRADO PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO.**

ALEJANDRO ALFARO RIVERA.

EL SECRETARIO

JHOSY JHOANY CASTAÑEDA TORRES.



TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO,
RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS

024743

3727/2018
SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2018 JUN 5 PM 12:11

OFICINA DE CORRESPONDENCIA
COMUN

- EXPEDIENTE (88) FOLIOS
- EXPEDIENTE (84) FOLIOS, SECCIÓN SUS
↓ 11 FOLIOS.

RECIBIDO DE ESTAMPADO EN LA 6015015556-24A501841651 CON:
- COPIA DEL OFICIO DE REVISIÓN
- ORIGINAL Y COPIA DE LOS EXTRACTOS DE PRESENTACIÓN Y DE
AGENDAS 65 (1) y (48) FOLIOS, CON USO
- DISCO COMPACTO
- JUICIO DE AMPARO DIRECTO

[Firma manuscrita]

Original.
3081
100

AMPARO DIRECTO CIVIL
QUEJOSA:

C. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO
EN EL ESTADO DE MORELOS.
P R E S E N T E.

[REDACTED], con la personalidad
acreditada en autos, ante usted, con el debido respeto comparezco para
exponer:

Que por medio del presente ocurso y con fundamento en
los artículos 80 y 81 FRACCION II de la ley de amparo en vigor, vengo por
su conducto **A INTERPONER EL RECURSO DE REVISION** en contra de la
sentencia de fecha 16 de abril del 2018, en el amparo directo civil número
[REDACTED] por la cual indebidamente se niega el amparo y protección de la
justicia federal, misma que causa agravios al desatender los derechos
humanos que se hacen valer en el amparo, expresando desde luego los
agravios dirigidos al máximo tribunal de la nación, los que una vez
distribuidos entre las partes remitir las constancias a la superioridad para
los efectos de la substanciación del recurso interpuesto, autorizando para
la alzada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado **A USTED C.**
PRESIDENTE DEL H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
DECIMO OCTAVO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA,
MORELOS. - Atentamente pido:

UNICO. - Tenerme por presentada, en los términos de
este escrito, **interponiendo recurso de revisión**, en contra de la sentencia
de amparo, en su oportunidad remitir los autos a la superioridad para la
resolución y resolución del recurso.

PROTESTO LO NECESARIO

CUERNAVACA, MORELOS., A 25 MAYO DE 2018

[REDACTED]

RECIBIDO
25 MAY 25 PM 4:45
RESIDENCIA EN
CUERNAVACA, MORELOS
CON FUNDAMENTO EN
LA LEY DE AMPARO
ARTICULO 80 Y 81
FRACCION II
FELASCOPIA DEL PRESENTE
5 lanes

167

REVISION CIVIL NUM:

REVISIONISTA: [REDACTED]

**C. MINISTRO PRESIDENTE DE LA H. SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION EN MEXICO
P R E S E N T E.**

[REDACTED], promoviendo
por mi propio derecho, señalando como domicilio para oír y recibir
notificaciones, EL [REDACTED]

[REDACTED] y autorizando para tales
efectos en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo en vigor, a los **CC.
LICS. NABOR MATIAS ALANIZ, JORGE IVAN MATIAS OCAMPO,
ALFREDO ESCOBAR RODRIGUEZ, GILBERTO MATIAS ALANIZ, MA.
JAQUELINE NAVARRO LAZARO Y YANETH VALDEZ RIVERA,** y
autorizando para oír y recibir notificaciones únicamente a los **CC. ERICK
ARMANDO MATIAS SALGADO, LUCIO JEHOVA MATIAS ALANIZ,
VANESSA CAROLINA GONZALEZ GOMEZ Y SAMMYR MATIAS QUIROZ,**
indistintamente, ante usted con el debido respeto, comparezco y expongo:

Que por medio el presente escrito y con
fundamento en los artículos 103 y 107 de Nuestra Carta Magna, en relación
con los diversos 81, 83 y 88 de la ley de amparo en vigor, **VENGO A
EXPRESAR LOS AGRAVIOS QUE ME CAUSA LA SENTENCIA
PRONUNCIADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
DECIMOCTAVO CIRCUITO EN EL ESTADO DE MORELOS,** en el juicio
de amparo directo civil [REDACTED], de fecha 16 de abril del 2018,
en la que en el punto resolutivo UNICO niega el amparo y protección a la
quejosa, violentando la ley de amparo en vigor, como se verá en los
siguientes: **A G R A V I O S:**

Previo a los agravios y para efecto de dar
cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 81 fracción II de la Ley
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, para sostener la
procedencia del recurso que en el caso se surte ante Suprema Corte de
Justicia de la Nación, por plantear en el primer concepto de violación de la
demanda de amparo la inconstitucionalidad del artículo 65 del código
familiar vigente en el Estado de Morelos, así como su inconvencionalidad por
pugnar con diversos tratados obligatorios para el Estado Mexicano, y que
en la sentencia de amparo se omitió su análisis y pronunciamiento por el
Órgano colegiado, cuando debió hacer una interpretación y por ello es
procedente el recurso de revisión a fin de que se realice una interpretación
general de inconstitucionalidad del precepto legal citado, y se deje sin

118

efectos el precepto que pugna con la ley fundamental y los convencionalismos obligatorios y vinculantes para el Estado Mexicano, por ende con fundamento en el artículo 81 fracción II de la Ley de Amparo en vigor es procedente y debe admitirse y substanciarse el recurso de revisión planteado en este amparo directo, por plantearse la inconstitucionalidad e inconventionalidad del precepto 65 del código familiar del Estado de Morelos, al omitir resolver sobre su inconstitucionalidad y violación a los derechos humanos de la impetrante, que fueron planteadas en la demanda de amparo, tal como se dispone en la ley de amparo en su artículo 81 que dice:

ARTICULO 81.- Procede el recurso de revisión: II.- En amparo directo en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea Parte u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno..."

Sentado lo anterior se plantearon los agravios sobre el análisis de la Inconstitucionalidad del artículo 65 del código familiar, a los que el Tribunal Colegiado declaro infundados y constitucional y convencional el artículo 65 del Código procesal familiar vigente en el Estado de Morelos, aduciendo en esencia que:

"...En síntesis, se estima que los requisitos establecidos por el artículo 65 del código sustantivo familiar para esta entidad federativa, no resultan inconstitucionales e inconventionales; pues la libertad configurativa ejercida por el legislador local para regular la figura del concubinato respeto los límites a los que está sujeta, esto es, a los derechos fundamentales derivados de la constitución General como de los Tratados internacionales y ratificados por país al no trastocar los derechos humanos de igualdad y no discriminación, por el contrario, son acordes al contexto de familia que prevé el artículo 4 de la carta magna..."

119

Es esta declaración de inconstitucionalidad la que hace procedente el recurso de revisión y se transcribe a esta H. suprema Corte de Justicia de la Nación para que estime la importancia y presencia del asunto a su consideración en torno a los argumentos de disenso de esta parte, con el criterio moralista de los órganos de control constitucional tanto del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil [REDACTED], resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, como del diverso Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en el criterio inserto en la tesis 1.12º C. 5. (10ª), publicada en la décima época de la gaceta al semanario judicial de la federación, libro 50, enero del 2018, tomo IV, visible en la página 2203, de epígrafe siguiente:

PAREJA ESTABLE COEXISTENTE CON EL MATRIMONIO. LOS ARTICULOS 302, 1602 FRACCION I Y 1635 DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL APLICABLE PARA LA CIUDAD DE MEXICO NO VULNERAN LOS DERECHOS HUMANOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION DE LA MUJER EN RELACION CON SU ESTADO CIVIL..."; criterios que deben ser declarados ilegales por esta Corte Suprema atendiendo a la progresividad de los derechos humanos y al moderno derecho civil que vislumbra hacia cambios radicales sobre el tema de la familia que *EN la data de épocas inmemorables de Estados moralistas como el Romano, y de los que NRCU CA, debe separarse el derecho familiar mexicano.*

PRIMER AGRAVIO.

FUENTE DEL AGRAVIO. - La resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil número [REDACTED], resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa [REDACTED]

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Se violan los artículos 74, 75, 76 de la ley de amparo en vigor, por interpretación y aplicación indebida de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la carta magna en relación a los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los Tratados Internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**, artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR,**

SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER,
artículos 4 y 14.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito, al pronunciar la sentencia de fecha 16 de abril del 2018, trasgrede el artículo 74 de la ley de amparo al no pronunciar la sentencia conforme al estudio del acto reclamado tal y como aparece en las constancias de autos, al no contener el estudio, análisis y fundamentos de los razonamientos para declarar infundados y esgrimir razonamientos torales en torno a la constitucionalidad del artículo 65 del código familiar del Estado de Morelos, sin dar respuesta contestación y estudio de todos y cada uno de los agravios planteados en la demanda de amparo en cuanto a la inconstitucionalidad o inconvencionalidad del precepto 65 de la ley sustantiva familiar de Morelos, puesto que **"omitió"** en forma grave estudiar y analizar los conceptos de violación en torno a que el precepto mencionado al definir la figura del "concubinato" es inconstitucional e inconvencional por ser discriminatorio, atentar contra la protección de la familia, contra la dignidad de la persona y en si dar respuesta a todos los argumentos de la quejosa en la demanda de amparo, **EN MATERIA** pues en una parte en torno a la inconvencionalidad del precepto se expresó **VACA, MC** en lo sustancial lo siguiente:

"...En esta directriz, el precepto 65 del código familiar del estado de Morelos, es anticonstitucional y violenta los derechos humanos antes indicados, además de atentar contra los diversos de dignidad, honor, no discriminación, reputación, decoración, de la mujer unida en concubinato, y impide el derecho al mínimo vital; derechos humanos que, deben de respetarse en toda norma jurídica, dada la obligatoriedad al haberse aceptado por el gobierno mexicano al disponerse en el ordinal 133, que constituyen en igualdad a la constitucional la ley suprema del país; y que, al exigir la conceptualidad del ordinal 65 inconvencional, que los concubinos no se encuentren unidos en matrimonio, ni tengan impedimento para contraerlo, la permanencia de cinco años, constituyen la inconstitucionalidad e incongruencia con los tratados internacionales antes invocados, contraviniendo los derechos humanos en cuanto a que:

A).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos es discriminatorio porque la expresión "discriminación contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos; y tal precepto considera desigual la relación matrimonial a la del concubinato, cuando ambas figuras tienen las mismas características, y debe considerarse a esta última (concubinato), un estado civil de la mujer o el hombre, para no denotar distinción, exclusión o restricción, como lo que contiene el precepto que se tilda de inconvencional.

B).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos es desigual porque considera distintivamente un estado civil de una mujer casada frente a otra unida en concubinato, distinguiendo y desconociendo su estado civil social o "estatus", colocándolas en planos diversos frente a la sociedad, a la ley y ante el Estado, en donde se da preferencia a la femenina en matrimonio a aquella que solo mantiene una relación de unidad de hecho, es decir, una unión de derecho frente a una unión de hecho.

C).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra la dignidad de la mujer porque la denigra en su persona y ante la sociedad, menospreciándola por no unirse en matrimonio, es decir, denigrándola por una relación de hecho que a la luz de la óptica de los magistrados y el legislador ordinario, consideran "moralmente prohibida", y le dan tratos diferentes cuando en si tienen las mismas características, y que impide el libre desarrollo de la personalidad de la mujer por falta de un documento oficial, título o prerrogativa para ser considerada igual social y legalmente.

D).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra la protección de la familia, porque impide el derecho a fundar una familia teniendo la edad, y desconoce y desatiende el deber de ser protegida por el Estado y la misma Sociedad.

E).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra el honor de la mujer, porque deshonra, degrada y menosprecia la relación concubinaria, al grado de mantenerla en segundo plano frente al matrimonio, pues aun cuando son uniones similares con las mismas características, les dan un trato legal

172

desigual, afectando incluso el decoro de la mujer que vive un concubinato.

Como se puede ver, en realidad el artículo 65 del código familiar invocado, es inconvenicional e inconstitucional, porque violenta la igualdad de las mujeres en relaciones diversas, al grado de menospreciar y considerar indignas a las personas unidas en concubinato, por la simple moral de una sociedad de por sí ya corrompida, empero que, aun con todos sus prejuicios, los derechos humanos han progresado y deben dirigirse su dirección al grado de olvidar y apartarse de viejas definiciones doctrinarios de lo que en realidad es el concubinato, en su definición gramatical original, para avanzar en la conceptualización, al llegar a considerar a la relación de concubinato "como un verdadero estado civil de la persona", pues no debe perderse de vista que en nuestro orden jurídico positivo, solo se reconocen como estado civil a estos conceptos: soltero (a) casado (a), viudez, divorciado(a), entre otros; pero no se contempla la relación de "concubinato" o la "unión libre"; aspectos que deben ser tomados dentro de un estatus de la persona, como es su estado civil de forma tal que no se discrimine, ni se le dé un trato desigual a una mujer casada y otra unida en concubinato, pues ambas aunque no tienen los mismo derechos (que deben tener), deben de ser consideradas y tratadas dignamente como iguales, sin importar si su relación tiene un título, o documento civil como un acta del registro civil o no, pues la relación de matrimonio y concubinato, aun en personas del mismo sexo, es en todo caso una relación, aun cuando entre una y otra situación exista como diferencia un papel de casado, ambas relaciones tienen y deben ser reconocidas por la ley, las mismas características, como son la unión en el caso entre un hombre y una mujer, en la que debe existir una convivencia de cierta estabilidad y permanencia, un trato sexual, con el propósito de vivir como marido y mujer, basada en las ayuda mutua, solidaridad, reciprocidad, y ostentarse ante la sociedad como pareja, o bien como marido y mujer.

A tales conceptos de violación la resolutoria de control constitucional, solo analizo tres de los agravios plateados como son el referente a la igualdad y no discriminación de la mujer, y de protección de la familia, mas omitió los argumentos de los incisos E), respecto al honor, y C) sobre la dignidad de la mujer como derecho humanos trasgredidos por el precepto en mención, omisión que por sí misma transgrede las reglas del juicio de agravio al omitir realizar el análisis en la sentencia de todos los argumentos y razonamientos en torno al agravio que se plantea, pero

además sobre los demás inciso de igualdad, discriminación y protección de la familia, no dio respuesta completa y extensa sobre a las consideraciones de la quejosa y por ende la sentencia de amparo es ilegal y debe revocarse.

Sobre el particular, El tribunal inferior, omitió dar respuesta a los motivos de violación del artículo 65 de la ley sustantiva familiar de Morelos en cuanto a la definición de concubinato cuando se expuso que:

A).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra la dignidad de la mujer porque la denigra en su persona y ante la sociedad, menospreciándola por no unirse en matrimonio, es decir, denigrándola por una relación de hecho que a la luz de la óptica de los magistrados y el legislador ordinario, consideran "moralmente prohibida", y le dan tratos diferentes cuando en si tienen las mismas características, y que impide el libre desarrollo de la personalidad de la mujer por falta de un documento oficial, titulo o prerrogativa para ser considerada igual social y legalmente.

B).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra el honor de la mujer, porque deshonra, degrada y menosprecia la relación concubinaria, al grado de mantenerla en segundo plano frente al matrimonio, pues aun cuando son uniones similares con las mismas características, les dan un trato legal desigual, afectando incluso el decoro de la mujer que vive un concubinato.

Sobre estos aspectos el Tribunal omitió analizar, razonar y resolver la procedencia de los conceptos de violación planteados, pues se consideró que el precepto es inconvencional porque atenta contra la dignidad de la mujer porque la denigra y contra su honor porque la deshonra al considerar a la mujer concubina como de segunda clase, al menospreciarla por mantenerla en segundo plano frente al matrimonio cuando deben ser iguales, porque los magistrados moralistas al igual que el legislador ordinario, consideran esa relación extramarital, sino legal, si moralmente prohibida, e impiden el normal desarrollo de la mujer por faltar el titulo oficial de matrimonio; argumentos a los que el resolutor jamás se pronunció en todo el contenido de su sentencia, trastocando así la ley de amparo en vigor, en los diversos numerales 74, 75 y 76.

179

SEGUNDO AGRAVIO

FUENTE DEL AGRAVIO. - La resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil número [REDACTED], resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa [REDACTED].

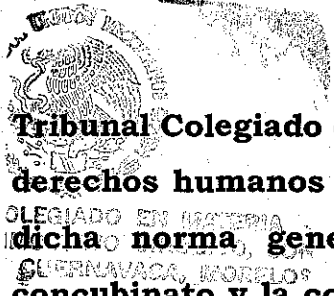
PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Se violan los artículos 74, 75, 76 de la ley de amparo en vigor, por interpretación y aplicación indebida de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la carta magna en relación a los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los tratados internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**, artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**, artículos 4 y 14.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO.- Es ilegal la consideración del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, al declarar constitucional y convencional el artículo 65 del Código Familiar en Vigor, al considerar que no es discriminatorio, ni desigual, ni atenta contra la dignidad de la mujer ni con el mínimo vital que dice no aplica, sometiendo al concepto moralista de "concubinato", a la idea tradicional, a su definición ancestral, soslayando el moderno derecho familiar, que ha evolucionado gracias a la progresividad de los derechos humanos de los que esta Máxima Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido pionera en su aplicación en nuestra país, máxime que así se ha establecido en el artículo 1 constitucional a raíz de su reforma, que obliga a todas las autoridades del país a velar y proteger los derechos humanos de las personas, al grado de hacer factible en los órganos de control constitucional, y en los órganos locales de aplicación de las normas, una interpretación extensa y más amplia que favorezca al ser humano, y en el segundo caso una inaplicación de normas generales inconstitucionales e inconvencionales, esto es ha fijado la interpretación extensa sobre la conforme que se venía utilizando, hasta invocar criterios adoptados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como criterios orientadores y

176

su caso obligatorios para los jueces mexicanos, introduciendo en nuestro derechos figuras jurídicas como la paridad de género, no discriminación, igualdad, mínimo vital, así como principios como pro persona, tutela judicial, progresividad de los derechos humanos, obligatoriedad de su observancia, y otros, evolucionando en diversos temas que han dado orientación a la aplicación del derecho al Estado Mexicano; de ahí, la ilegalidad de la sentencia al hacer una incorrecta interpretación del artículo 165 del código familiar vigente en el Estado de Morelos.

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Octavo Circuito estable, en la sentencia del [REDACTED], promovido por la quejosa, en torno a la inconstitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar para el Estado de Morelos, inicia su estudio planteándose la siguiente interrogante: ¿los requisitos establecidos en el artículo impugnado para la configuración del concubinato son inconstitucionales y/o inconvenientes?

 Para esgrimir en un primer análisis que: **“este Tribunal Colegiado considera que el numeral impugnado no vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de la mujer, pues dicha norma general tiene como función regular la figura del concubinato y la consecuente generación de derechos y obligación de quienes así estén unidos previa la satisfacción de requisitos para su configuración y existencia, entre los que se encuentran la convivencia, la procreación de uno o más hijos en común y, además, que ninguno de los concubinos se encuentre en matrimonio con persona distinta o tenga impedimento para contraerlo, elemento insoslayable que genera certeza jurídica entre los consortes o concubinos, incluso terceras personas...”**

Sustentando su interpretación en la definición del artículo 65 del código sustantivo familiar de Morelos, de donde advierte que este precepto conceptualiza la definición de concubinato y que consiste en **“la unión de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y permanente generando derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la convivencia...”**; de lo que advierte que el legislador local ha optado por regular parejas de hecho, es decir, aquellas parejas que mantienen una relación estable y continuada pero que han preferido no sujetarse a un régimen matrimonial bajo la figura del concubinato, que el legislador morelense se ha decantado para reconocer efectos jurídicos concretos a una relación en la que no existe vida en común **—como la que**

existe en el matrimonio-, pero que en realidad constituye una unión fáctica de dos personas que en última instancia conforman una familia en el sentido más amplio de la palabra.

Continúa exponiendo el órgano colegiado en su sentencia que el legislador familiar en uso de la libertad configurativa de la materia puede establecer cuáles son los requisitos para conformar ese tipo de relaciones (**lo que nunca se le cuestiona**), que de este modo la legislación local exige la observancia de elementos específicos para la configuración del concubinato, tales como el que ninguno de los concubinos se encuentre en matrimonio con persona distinta o tenga impedimento para contraerlo; que esto así previsto encuentra sustento en el mandato constitucional establecido en el artículo 4º de la Constitución General de la República consistente en la protección de la organización y desarrollo de la familia, pues **lo que se busca evitar son situaciones de injusticia o desprotección sobre aquellas personas que si bien conforman una familia, no lo hacen en un esquema matrimonial.**

Que, así es claro para el órgano colegiado, que el concepto constitucional de familia fue adoptado por el legislador ordinario no de una manera restrictiva o centrado exclusivamente en familias formales en un contexto matrimonial, que el concepto se extendió en una concepción más amplia al incluirse en ellas situaciones de convivencia ajenas al matrimonio que desarrollan los mismos fines que este y que, por lo tanto, deben recibir los mismos niveles de protección, **sin embargo**, lo anterior **no significa que exista una equivalencia entre el matrimonio y el concubinato, pues la regulación de aquel tipo de uniones corresponde al legislador local...**

Este argumento del Tribunal Colegiado en Materia Civil, deviene ilegal y se aparta de los artículos 74, 75, y 76 de la ley de amparo en vigor, al no apreciar el acto tal y como aparece probado ante la autoridad responsable en las constancias de autos, sin examinar de manera conjunta los conceptos de violación que fueron planteados ni expone las consideraciones legales ni fundamentos en que se apoya para declarar constitucional el artículo 65 del código familiar morelense, solo asume una postura sumisa al poder legislativo local, aduciendo que es **"facultad del legislador local la regulación de las uniones o situaciones ajenas al matrimonio"**, o que **"el legislador local en uso de su libertad configurativa de la materia (en el tema del concubinato) puede establecer cuáles son los requisitos para conformar este tipo de relaciones"**, o bien que **"es de este modo que la legislación local exige la**

observancia de elementos específicos para la configuración del concubinato, tales como el que ninguno de los concubinos se encuentre unido en matrimonio con persona distinta o tenga impedimento para contraerlo”, o bien que el hecho de reconocer y regular el concubinato **no significa que exista una equivalencia entre el matrimonio y el concubinato, pues la regulación de aquel tipo de uniones corresponde al legislador local...**”; tales aspectos sumisos al legislador Morelense, son inaceptables por ilegales e infundados, dado que el órgano colegiado, no precisa las razones, motivos, ni fundamentos para considerar que la facultad legislativa de establecer requisitos corresponda a únicamente a la legislatura local, y porque los tribunales federales en materia de amparo al ejercer un control constitucional y convencional de las normas **no tenga facultades el Tribunal colegiado de declarar ilegales por inconstitucionales o inconventionales los requisitos o todo el contenido de una norma**, en el caso del artículo 65 del código familiar Morelense, puesto que, siendo una facultad conferida por la constitución y por la ley de amparo a los órganos del poder judicial para realizar **“un control constitucional de los actos y de las normas generales”** al grado de poder declararlos ilegales e inconventional e inaplicables a un caso concreto, esto es, que no explica como consideraciones o fundamentos de su sentencia conforme al artículo 74 párrafo IV, de la ley de amparo, porque **considera que es facultad de legislador establecer situaciones o reconocerlas y sus requisitos en cuanto a las situaciones de convivencia ajenas al matrimonio, y porque razones no puede declarar inconstitucionales o considerar otras o equivalencias entre estas, cuando este órgano precisamente es de control constitucional, lo que significa que puede interpretar si este artículo 65 del código familiar es inconstitucional o inconventional y si el concubinato y matrimonio deben ser iguales o equivalentes, si los requisitos para su definición son ilegales, si pugnan con la misma carta magna o los derechos humanos y pueda declararlos inconventionales o inconstitucionales e incluso establecer una interpretación más amplia o en otros casos mínima del contenido, o concepto estatuido en esas normas, o bien declarar en absoluto inconstitucional o inconventional e inaplicable al caso; y en ese orden porque consideró declarar constitucional por este motivo el artículo 65 del código familiar de Morelos, ya que toda sentencia de amparo debe contener precisamente los fundamentos y consideraciones para negar, sobreseer o conceder un amparo, lo que no observo el Tribunal Colegiado en materia civil de que se trata al negar la protección declarando constitucional el precepto en cita.**

En esta vertiente, el Tribunal Colegiado desatiende su función de control constitucional y su obligación de fundar y motivar las sentencias de amparo conforme al artículo 74 fracción IV de la ley de amparo, ya que al realizar la constitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos basado únicamente en el argumento de que es facultad exclusiva del legislador local de regular parejas de hecho reconociendo o definiendo situaciones de convivencia ajenas al matrimonio, establecer los requisitos para la figura de cada una de ellas como el concubinato, como que no exista matrimonio en alguno de los concubinos, o bien que, al reconocer esas uniones distintas del matrimonio, no exista una equivalencia entre una y otra pues su regulación corresponde exclusivamente al legislador local, lo que de suyo es inexplicable e infundado absolutamente, pues el órgano de control constitución al puede dar un significado extenso a la definición de concubinato distinta a la de la norma, o bien invalidar todo el precepto o señalar de inconstitucionales o inconvenional tales requisitos, pues es propio de su facultad de control constitucional incluso reconocer situaciones no existentes en dicha norma, ya que el control constitucional precisamente faculta al órgano constitucional a realizar una interpretación conforme y extensa o más amplia de la norma no solo sujetándose a los preceptos de la carta magna sino a los tratados internacionales obligatorios para el estado mexicano, al grado de realizar una interpretación diversa a la contenida, suprimir requisitos, ampliar definiciones, o bien inaplicar todo su contenido introduciendo otros conceptos diversos al interpretado, hasta en último extremo declarar inconstitucional toda la norma y por ende su inaplicación al caso concreto, lo cual no expone en absoluto el órgano resolutor porque razones no considero facultad el interpretar de una u otra forma el precepto en mención, es decir porque razones no tenía facultades para realizar interpretación diversa a la definida en el contenido del artículo 65 del código familiar de Morelos, si precisamente se planteó su inconstitucionalidad por no considerar equivalente o igual un matrimonio con un concubinato, además que porque ambas figuras debían coexistir en unas mismas personas, esto es concubinato y matrimonio al mismo tiempo, esto es que no debían excluirse, así como declarar ilegal el requisito contenido en la norma sobre que ninguno de los concubinos se encuentre en matrimonio con persona distinta o que tenga impedimento para contraerlo; y por tanto se estima infundado el argumento del Tribunal Colegiado pues si puede como morganio de control declarar ilegal tal o cual definición o requisito acorde a la facultad interpretativa de las normas para ejercer un control constitución o difuso, esto es un control convencional.

Bajo esta óptica, no se cuestionó si era facultad legal o no del legislador local el definir el concubinato, establecer sus requisitos y condiciones o su reconocimiento, ni se plantea la derogación de la norma, pues esta no es facultad de los órganos de amparo, pero si el control de constitucionalidad de las leyes o actos de autoridad, y en este sentido puede declarar ilegales definiciones, requisitos, condiciones o todo un precepto, para su inaplicación al caso concreto, mas no para su derogación, abrogación o reforma, es decir no pueden modificar la ley o el precepto, empero si tiene facultad para interpretarlos y declararlos inconstitucionales e inaplicarlos o bien declarar inaplicables requisitos, condiciones presupuestos, o definiciones y establecer otras diversas, puesto si es facultad del órgano de control constitucional en la interpretación de las leyes.

En esta secuencia, es errónea la interpretación que realiza el Tribunal Colegiado, al señalar que el numeral impugnado no vulnera los derechos humanos de igualdad y no discriminación de la mujer, porque a su parecer la norma tiene como finalidad regular la figura del concubinato y la consecuente generación de derechos y obligaciones, previa la satisfacción de requisitos para su configuración y existencia como la convivencia, la procreación de uno o más hijos en común, y además, que ninguno de los concubinos se encuentre en matrimonio con persona distinta o tenga impedimento para contraerlo, elemento insoslayable que dice genera certeza jurídica entre consortes, concubinos y terceras personas; que la figura del matrimonio definida en el artículo 68 del mismo código sustantivo familiar de Morelos, que es la unión voluntaria y libre de dos personas, con igualdad de derechos y obligaciones con la posibilidad de procreación hijos y de ayuda mutua y sus particularidades son en lo conducente aplicables al concubinato, siempre que ninguno de los contratantes se encuentre en matrimonio con persona distinta o tenga impedimento para contraerlo, hayan vivido en común por un periodo mínimo de cinco años o, en su caso, hubieren procreado hijos en común.

Contrariamente a lo argumentado por el tribunal colegiado, si existe inconstitucionalidad e inconveniencia en el artículo 65 del código familiar de Morelos, porque atenta contra la igualdad de las personas sobre todo de las mujeres en su condición o estatus social, en su estado civil pues como se ha expuesto da un trato desigual a la mujer casada que a la unida en concubinato, esto es considera dos tipos de mujer una casada y otra concubina, lo cual denigra o ofende a la mujer en su dignidad de ser humano, pues la coloca en desventaja de la mujer con contrato matrimonial a aquella que no lo tiene, esto es que da un trato

desigual esta norma a las Mujeres Morelenses por su estatus o condición de casadas o concubinas De tal forma que por el título, emolumento o prerrogativa, como es un acta del registro civil de matrimonio, que expide el Estado Mexicano, frente a una relación de hecho **se coloca a las mujeres según su estado o condición de su relación marital o extramarital, en mujeres de primera o mujeres de segunda.**

Por lo que es notorio que el precepto 65 del código familiar de Morelos, es anticonstitucional y trasgrede la igualdad absoluta, relativa, así como la igualdad personal, esto es en su vertiente de garantía individual o derecho fundamental y en su vertiente de derecho humano, **ya que toda disposición debe respetar en principio la igualdad entre las personas, es decir que en su vertiente de derecho connatural del individuo que preexisten a este**, y que tiene como principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, de características sobre la especie de derechos humanos consistentes en ser inherentes al individuo, esto es que **por ser de intrínseca la dignidad de la persona, implica que todo ser humano debe ser tratado por igual tanto por otro individuos como por el Estado, de forma tal que, siempre goce de bienes que son propios**, que además deben ser **no discriminatorios**, esto es que, parten de la igualdad entre todas las personas, que implica que todos son iguales en dignidad, y con independencia de sus condiciones o circunstancias todos gozan de los derechos humanos que además son **incondicionales**, por no estar sujetos a condición alguna para gozar de ellos sin importar las circunstancias, que además **son preexistentes** por que nacen con la persona, pues se trata de derechos innatos a ella, que además tiene características como **transnacionales, inalienables, imprescriptibles, irrenunciables e irreversibles**, que no pueden restringirse ni suspenderse arbitrariamente, que protegen a la persona, sin importar su condición, que limitan al poder público, de forma que son derechos que se encuentran fuera de la esfera de lo decible de las autoridades públicas, y son límites a la autonomía de la voluntad, es decir son válidos en el plano de coordinación, al ser límite de la autonomía individual, que a diferencia de las garantías constitucionales que se dan en plano de supra a subordinación, por ello, dada la naturaleza de los derechos de la persona en su humanidad, se tiene que deben de observarse en todo acto o resolución de las autoridades, para la aplicación del derecho, ajustando sus actos a estos por ser ley suprema de la nación, al ser reconocidos en los tratados internacionales que México es parte y por ende obligan al estado mexicano a su observación y cumplimiento en términos del artículo 133 de la ley suprema del país.

La igualdad, de la que se viene hablando aplica no solo entre hombre o mujer, sino entre personas del mismo sexo, es decir entre mujeres o entre hombres en su género, de tal forma que todas las mujeres son iguales ante la ley al igual que todos los hombres además de ambos géneros, pues el concepto como derecho humanos e extiende a toda clase de igualdad de la persona, lo que desatiende el Órgano colegiado ya que incluso adopta las mismas definiciones legislativas y se limita a la interpretación de la norma como la estableció el legislador, creyéndose incompetente para hacer una interpretación inconstitucional de la norma, adoptando un criterio sumiso y contrario a la constitución y los tratados internacionales vinculantes al Estado mexicano, **ya que los derechos humanos derivados de la constitución en sus artículos 1 y 4** así como de los instrumentos internacionales invocados, nos conducen a la facultad del juzgador de control constitucional de inaplicar este precepto, declararlo inconstitucional en toda su definición, en parte, o adoptar otra diversa, sin que con ello se invada la facultad legislativa, pero en la que tiene de interpretación de la constitución y su control aunado a la convencionalidad, bien debe declarar inconstitucional una norma como el contenido del precepto 65 del código familiar al considerarse desigual.

Por esto, conforme al artículo 1 constitucional queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, y conforme al ordinal 4 de la misma ley suprema, el varón y la mujer son iguales ante la ley, esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia; lo contraviene y contradice el artículo 65 del código familiar en vigor, en Morelos, porque lejos de dar protección a la familia, entendiéndose el concubinato como un derecho familiar, y por el cual la unión de hecho conforma una verdadera familia, al hacer vida en común, que debe ser protegida y garantizada, no menospreciada, discriminada y excluyente por un precepto de ley como el reclamado, que se contrapone al marco constitucional mexicano y por ello debe inaplicarse, al ser considerado inconstitucional, al trasgredir el contenido de los artículos 1 y 4 constitucionales que dicen:

Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)

PRETE.
RCUITO,
A. MORE

Art. 4o.- El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE DE 1974)

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

(ADICIONADO, D.O.F. 13 DE OCTUBRE DE 2011)

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

(ADICIONADO, D.O.F. 3 DE FEBRERO DE 1983)

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución.

(REFORMADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012)

Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 8 DE FEBRERO DE 2012)

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.

(REFORMADO [N. DE E. ADICIONADO], D.O.F. 7 DE FEBRERO DE 1983)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez.

(REFORMADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011)

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios.

(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) (F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000)

El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

(ADICIONADO, D.O.F. 30 DE ABRIL DE 2009)

Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.

(ADICIONADO, D.O.F. 12 DE OCTUBRE DE 2011)

Toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia.

El derecho humano y fundamental de igualdad, se presenta en tres formas la igualdad absoluta, relativa y normativa, entendiéndose a la primera como la igualdad entre hombre y mujer son en la misma medida sujetos de derechos, agregando que por igual el hombre en si es igual con su género y a la vez la mujer en si es igual, es decir todos los hombres son iguales ante la ley y todas las mujeres por lo mismo son iguales ante la misma ley, la segunda consiste en que dependiendo del estado de las cosas las personas en situaciones análogas deben recibir el mismo trato y la última radica en el derecho y no en las personas y busca que la norma aproveche por igual a todos los individuos, siendo el sistema jurídico el que se adapta a las personas y no las personas al sistema jurídico.

Igualdad que, se interrelaciona con la **no discriminación** como derecho humano de la persona y con el diverso connatural **de dignidad humana, el honor**, así como con la **protección y desarrollo de la familia** que a la vez se correlacionan con **el mínimo vital**, que desatendió el Tribunal Colegiado, a pesar de que los tribunales de la

federación han establecido que **“la dignidad humana”** es un valor supremo establecido en el artículo 1 de la carta magna, por el cual se reconoce una calidad única y excepcional a todo ser humano por el simple hecho de serlo, cuya plena eficacia debe ser respetada y protegida íntegramente sin excepción alguna”, conceptuada en derechos humanos como **“un atributo inherente a la persona humana que la hace merecer respeto y delimita un ámbito de prerrogativas que se le deben garantizar a fin de que tenga una existencia plena y compatible con su propia naturaleza”**, o más simplemente, “el derecho y condición fundamentalísimo base de los demás derechos humanos de la persona, consistente en el valor supremo de la persona de ser respetada y protegida que le asegura su existencia absoluta y su calidad humana”; ya que incluso separo de los demás como el mínimo vital al que es relación de los demás derechos humanos, omitiendo exponer por lo mismo, argumentos tendientes a desestimar o estimar los conceptos de violación sobre el particular, ya que dichos argumentos se vertieron para evidenciar la inconstitucionalidad e inconveniencia del artículo 65 del código familiar del Estado de Morelos.

Consecuentemente, contrario a lo expuesto por el resolutor de control de la constitución, si es inconstitucional e inconveniente el artículo 65 del código familiar en comento, al atentar contra la igualdad y la dignidad humana, porque en principio se aparta del artículo 1 constitucional que al establecer que todas las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna, por cualquier circunstancia o condición personal o social, que atente contra la dignidad humana, que conforme a los instrumentos internacionales el estado mexicano reconoce el valor supremo de la dignidad humana de la cual derivan los demás derechos connaturales de la persona como son el derecho a la vida, a la integridad física, al honor, a la privacidad, al libre desarrollo de la personalidad, entre otros, además de que se aparta del artículo 4 constitucional que prevé que el hombre y la mujer son iguales ante la ley, ya que el precepto cuestionado de la ley familiar de Morelos, si atenta contra la dignidad humana y desatiende la igualdad de las mujeres al hacer distinción entre concubina y matrimoniada, entre las mismas mujeres, la sociedad y ante la ley, al hacer una definición de concubinato desigual e impropia a los tiempos modernos, pues el legislador ha exigido en esta definición aspectos que no exige la propia sociedad.

Por ende, debe separarse esta Corte de las viejas definiciones y conceptos de concubinato, y del contenido del artículo 65 del código familiar citado, porque este precepto, atento a la finalidad de la norma, **no permite legalmente la coexistencia de una relación de matrimonio y una de hecho, lo cual debe superarse por exigencia social, que si bien las normas, pueden describir una conducta o limitante para llegar al fin que teleológicamente se le encomendó**; sin embargo, la realidad ofrece multiplicidad de conductas o limitantes que objetivamente podrían adecuarse a dicha descripción pero que, en esencia, no cumplen con el fin de la norma, por tanto, debe determinarse cuáles de esas conductas o limitantes cumplen con la función de ésta y cuáles no, lo cual viene a ser también un elemento de esa disposición.

Así por ejemplo, el matrimonio del demandado, con tercera persona, **no coexistió con la unión de hecho** que se dio por parte de la quejosa, porque aunque el demandado procreo dos hijos y se unió en matrimonio, fue al margen del concubinato que existió o coexistió con la peticionaria, de lo que se concluye que si bien es cierto que aparentemente no aparecen demostrados los elementos objetivos del artículo 65 citado, por estar acreditada con el acta de matrimonio y de nacimiento de los hijos del demandado que existió una relación matrimonial posterior al concubinato con la actora, y la procreación de dos hijos de su concubino con diversa persona, **no por ello debe considerarse de facto que la unión de hecho no existió**, pues en la demanda se planteó, acredito y evidencio que la relación de concubinato entre la impetrante [REDACTED] y el demandado [REDACTED] y que si bien ocultamente el concubino mantuvo otra relación de concubinato o de unión libre con otra persona tercera con quien procreó dos hijos y después se unió en matrimonio, **ello no resta existencia o fin a un concubinato previo a su conducta bigama del demandado**; y por ende, existió una relación poligamia por parte del demandado no tercero interesado, para con su concubina, pues lo que se dieron fueron dos relaciones monogámicas en dos tiempos diferentes, ya que el matrimonio civil del demandado con la tercera fue el 23 de mayo del 2013, muy posterior a la relación de concubinato de la quejosa, de aproximadamente 12 años pues inicio en el 2006.

Esto es que, no tiene motivos para definir de esa forma al concubinato, **como la permanencia, el tiempo de más de cinco años**, y que **no exista matrimonio por alguno de los cónyuges con otra persona o impedimento para contraerlo**, ya que estos requisitos constituyen precisamente **la discriminación**, la desigualdad y atentan con la dignidad humana, además de la desprotección a la familia y generan

deshonra y deshonor a la mujer además de no respetar el mínimo vital, entendido no como el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, como contrariamente lo afirmo el Tribunal Colegiado, sino relacionado al derecho derivado del concubinato de proporcionar alimentos al acreedor alimentista. Por lo que existiendo discriminación no es dable la interpretación conforme, sino que existe la obligación de reparar y para determinar su alcance debe acudirse a ambas fuentes favoreciendo la interpretación más amplia a la persona; siendo aplicable al caso las siguientes: **TESIS JURISPRUDENCIAL 47/2015 (10a.)** Y **TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2015 (10)**; que textualmente disponen lo siguiente:

TESIS JURISPRUDENCIAL 47/2015 (10a.) NORMAS DISCRIMINATORIAS. NO ADMITEN INTERPRETACIÓN CONFORME Y EXISTE OBLIGACIÓN DE REPARAR.

Cuando una norma en sí misma discrimina a una persona o grupo de personas que se ubican en una categoría sospechosa, no es posible realizar una interpretación conforme, pues dicha norma continuaría existiendo en su redacción, aun siendo discriminatoria y contraria al artículo 1o constitucional y a las obligaciones internacionales contraídas por México en cuanto a no discriminar con base en categorías sospechosas. Estas obligaciones no pueden cumplirse mediante una interpretación que varíe la base misma del concepto impugnado y que no modifique la situación discriminatoria

INTERPRETACIÓN
CONFORME,
A. MOREL

sufrida por dichas personas. Un planteamiento como ese es incompatible con un Estado constitucional de derecho que aspira a tratar con igual consideración y respeto a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Si se considera que una norma es discriminatoria, la interpretación conforme no repara dicha discriminación porque lo que buscan las personas discriminadas es la cesación de la constante afectación y su inclusión expresa en el régimen jurídico en cuestión; en otras palabras, no sólo acceder a esa institución, sino suprimir el estado de discriminación generada por el mensaje transmitido por la norma. Así pues, el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo. Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de

cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguel. Amparo en revisión 735/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. México, Distrito Federal, cuatro de junio de dos mil quince. Doy fe. "En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales." MSN/rfr.

SECRETARÍA DE JUSTICIA
FOLIO 187
EN
CIR
WAG

TESIS JURISPRUDENCIAL 29/2015 (10ª) DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA. Acorde con lo sostenido por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.)¹, las normas de derechos humanos contenidas en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, ya que se integran al catálogo de derechos que funciona como un parámetro de regularidad constitucional. Por tanto, cuando un derecho humano esté reconocido tanto en la Constitución Federal, como en los tratados internacionales, debe acudirse a ambas fuentes para determinar su contenido y alcance, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia; en el entendido de que cuando exista en la Constitución una restricción expresa al ejercicio de un derecho humano, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional. Amparo directo en revisión 4533/2013. 18 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 4/2014. 13 de agosto de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de

Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretario: Arturo Meza Chávez. Amparo directo en revisión 1337/2014. 22 de octubre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 2680/2014. 12 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín. Amparo directo en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón. ¹Nota: La tesis de jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) invocada, fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 202, de rubro: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUELLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL." LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA

MATERIA
CIVIL, CON
MORELIA

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de quince de abril de dos mil quince. México, Distrito Federal, dieciséis de abril de dos mil quince. Doy fe. "En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales

Porque la desigualdad, está relacionada con la **no discriminación** y con la dignidad de la persona, ya que al plantear la inconstitucionalidad del precepto ante el Tribunal Colegiado en materia Civil, se mencionó esta relación de modo tal que se consideró desigual la definición del concubinato por exigir diversos requisitos como la permanencia, **que algún concubino no estuviera casado con otra persona**, y el término de 5 años, que además no se debía mantener la definición gramatical pues debería considerarse que podrían coexistir un matrimonio y concubinato al mismo tiempo sin excluirse el uno del otro, esto de uno de los concubinos con un tercer cónyuge y no por esto debía terminarse de facto la relación de concubinato, si alguna de las dos fue

oculta, definición que atenta contra los derechos humanos del igualdad y dignidad de la persona.

Así pues, esta Suprema Corte de justicia ha evolucionado en el reconocimiento de los derechos humanos, de la que ha sido pionera como en el reconocimiento público del matrimonio entre personas del mismo sexo, así como la inconstitucionalidad en la enunciación en caso de no preverlo expresamente, **que sitúa a la dignidad del ser humano más allá de los meros efectos restitutivos** y articula un entendimiento de dignidad que es fundamentalmente transformativo y sustantivo, al grado de reconocer la paridad de género, la igualdad ante la ley, la dignidad, la protección de la familia, entre otros diversos, por ende si en el ámbito jurisdiccional se advierte como en el caso, que una persona se encuentra en situación de desventaja respecto de las demás partes del litigio, por estar probado su estado de vulnerabilidad, por cuestiones de género, conforme al artículo 1 constitucional, es legal buscar un equilibrio entre las partes, mediante la aplicación del estándar de equidad y género, determinando si dadas las características particulares del asunto es razonable remover los obstáculos que impiden el pleno acceso de los derechos humanos de la parte que previamente se determinó que se encuentra en una posición de desventaja; para establecer en la sentencia, contrario a lo que hace la sala, la aplicación conforme de la ley familiar, con la constitución y los tratados internacionales invocados, declarando ilegal o inaplicando el precepto 65 del Código Procesal y las normas que obstaculicen para tener por existente una relación de concubinato que realmente existió entre actor y demandado, tal como lo asentó en los matrimonios y concubinos del mismo sexo, o que defina al matrimonio como aquel cuya finalidad es la procreación, o que se celebre entre un hombre y una mujer, es inconstitucional, permitiendo así la párida de género, en la siguiente jurisprudencia que se invoca con carácter orientador, que dice:

TESIS JURISPRUDENCIAL 43/2015 (10a.) MATRIMONIO. LA LEY DE CUALQUIER ENTIDAD FEDERATIVA QUE, POR UN LADO, CONSIDERE QUE LA FINALIDAD DE AQUÉL ES LA PROCREACIÓN Y/O QUE LO DEFINA COMO EL QUE SE CELEBRA ENTRE UN HOMBRE Y UNA MUJER, ES INCONSTITUCIONAL. Considerar que la finalidad del matrimonio es la procreación constituye una medida no idónea para cumplir con la única finalidad constitucional a la que puede obedecer la medida: la protección de la familia como realidad social. Pretender vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales de quienes pueden acceder a la institución matrimonial con la procreación es discriminatorio, pues excluye injustificadamente del acceso al matrimonio a las parejas homosexuales que están situadas en condiciones similares a

las parejas heterosexuales. La distinción es discriminatoria porque las preferencias sexuales no constituyen un aspecto relevante para hacer la distinción en relación con el fin constitucionalmente imperioso. Como la finalidad del matrimonio no es la procreación, no tiene razón justificada que la unión matrimonial sea heterosexual, ni que se enuncie como "entre un solo hombre y una sola mujer". Dicha enunciación resulta discriminatoria en su mera expresión. Al respecto cabe recordar que está prohibida cualquier norma discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, tanto por parte de autoridades estatales como de particulares, pueden disminuir o restringir los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Así pues, bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual. Por tanto, no es factible hacer compatible o conforme un enunciado que es claramente excluyente. Amparo en revisión 152/2013. 23 de abril de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: Karla I. Quintana Osuna y David García Sarubbi. Amparo en revisión 122/2014. 25 de junio de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo en revisión 263/2014. 24 de septiembre de 2014. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretaria: Ana Carolina Cienfuegos Posada. Amparo en revisión 591/2014. 25 de febrero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto aclaratorio, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. Amparo en revisión 704/2014. 18 de marzo de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien formuló voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien formuló voto particular. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. LICENCIADO HERIBERTO PÉREZ REYES, SECRETARIO DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, C E R T I F I C A: Que el rubro y texto de la anterior tesis jurisprudencial fueron aprobados por la Primera Sala de este alto tribunal, en sesión privada de tres de junio de dos mil quince. México, Distrito Federal, cuatro de junio de dos mil quince. Doy fe. "En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II y 20, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión Pública se suprimen los datos personales."

En efecto, el código familiar del Estado de Morelos en su definición de concubinato si trasgrede el derecho a la igualdad de las mujeres que están unidas en matrimonio de aquellas que no lo están y que tiene una relación de concubinato, discriminando a las segundas que no tiene el título oficial del acta de matrimonio por ese solo hecho, denigrando su persona, atentando contra su dignidad y contra sus valores como persona, lo cual debe ser reparado ya que no existe interpretación conforme pues ante el innegable hecho de desigualdad asociado a la discriminación de la mujer concubina de la casada, a la que sin reconocerle su estatus social, se le da en la ley un trato desigual, de un modo inexplicable y ajeno a la realidad social, habida cuenta que nuestra sociedad mexicana y la morelense, han hecho patente la motivación al legislador a reconocer esa relación extramarital, de modo moralista y tradicional, empero se ha reconocido, pero ese reconocimiento de la figura de concubinato en su definición ha sido rebasada en nuestros tiempos, al grado de que la misma sociedad morelense ya no ve a las relaciones extramaritales de un modo inaceptable como antes si, al grado de que en la sociedad mexicana se ha reconocido por este honorable y máximo tribunal la **"paridad de género"**, reconocimiento que jamás hizo el legislador, sino que fue por iniciativa de la propia suprema corte atendiendo a la progresividad de los derechos humanos que al hacer la interpretación constitucional declaro contrarios aquellos preceptos, códigos y leyes que estatuyeran la definición de matrimonio como la unión de un hombre con una mujer, pues atentaba contra la libertad y la igualdad de las personas, estableciendo el principio de paridad de género, lo que obligó al legislador a aquellos que son coherentes con el criterio del máximo tribunal a cambiar su definición de matrimonio, y no solo de esa institución, sino del mismo concubinato que puede existir entre personas del mismo sexo, lo que desatiende el órgano colegiado en este amparo, pues el caso es que abandone la definición del concubinato previsto en el artículo 65 del código familiar del Morelos y establezca definición diversa conforme a la exigencia social, al moderno derecho de familia, así como a la necesidad social, ya que se insiste, la sociedad ya no discrimina a estas personas del mismo sexo por estar en una relación matrimonial o extramatrimonial, es decir ni siquiera hace distinciones, ya no prejuzga sobre su estatus social les da un trato igual que la ley las considera desiguales.

El resolutor en la sentencia impugnada se allega de la definición de concubinato que da el artículo 65 del código familiar, que textualmente cita y dice:

ARTÍCULO 65.- CONCUBINATO. Es la unión de hecho de un hombre y una mujer, ambos libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, que viven de forma constante y permanente, generando derechos y obligaciones al procrear hijos o manteniendo la convivencia.

Para acreditar el concubinato, el Juez deberá tomar en consideración que los concubinos han vivido en común de manera ininterrumpida durante cinco años o han procreado hijos en común.

La definición adoptada por el órgano colegiado, prevista en el precepto 65 reclamado de inconstitucional, precisamente deviene inconvencional porque atenta contra los artículos 11, 17 y 24 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, ADOPTADA EN SAN JOSE DE COSTA RICA Y ABIERTA A FIRMA EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 1969, CON LAS DECLARACIONES INTERPRETATIVAS AL PARRAFO 1 DEL ARTICULO 4 Y AL ARTICULO 12 Y LA RESERVA AL ARTICULO 23, PARRAFO 2, QUE FORMULARA EL EJECUTIVO DE LA UNION AL PROCEDER A SU ADHESION; Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el jueves 7 de mayo de 1981, **que textualmente dicen:**

IAERIA
UNITO, C
MORELO

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.

Artículo 17. Protección a la Familia.

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado.
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención.

Artículo 24. Igualdad ante la Ley.

Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Por ende, se considera que la Convención Americana de Derechos Humanos prevé en los artículos 11, 17 y 24, como

derechos connaturales a la persona, y que protege, el respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad, Protección a la Familia, e, igualdad ante la ley, sin discriminación, a igual protección de la ley, de forma tal que el artículo 65 del Código Familiar Vigente en el Estado de Morelos, los vulnera, al discriminar a la mujer, por considerar indigna una relación en concubinato frente a una relación matrimonial, al establecer mujeres de segunda frente a las de primera por estar casadas, afectando su honra, su honor, su dignidad, menospreciándolas, agravando la dignidad de la mujer en general y en particular a la hoy quejosa, apartándose de la protección de la familia, **pues al exigir en la definición de concubinato que en la unión de hecho de un hombre y una mujer, estén libres de matrimonio y no tengan impedimento para contraerlo**, discrimina totalmente a la mujer, frente a la misma pero en una relación con título o reconocimiento oficial por el Estado, tratando a las concubinas como en el caso a la quejosa, en forma desigual, sin reconocer su "estatus", pues en dicha relación de concubinato, exige mucho más requisitos que la propia definición gramatical original de la palabra, encierra conforme a su naturaleza, **dado que en la relación de hecho o fáctica que el varón y la mujer asumen en una convivencia de cierta estabilidad y permanencia, (lo que en realidad es el concubinato); no debe exigirse que ambos cónyuges estén libres de matrimonio o que no tengan impedimento para contraerlo, para reconocer una relación de concubinato**, pues exigir estos requisitos, trasgreden los derechos humanos de igualdad, no discriminación, protección de la familia, dignidad, honra y derecho al mínimo vital, por lo que debe declararse inconvencional y por ende inconstitucional el precepto de la ley citada y la sentencia que lo aplica.

También, el artículo 65 del Código Familiar en Vigor en el Estado de Morelos, cuestionado de inconvencional, trasgrede los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los tratados internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**, artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**, artículos 4 y 14, que textualmente disponen:

CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER. TEXTO ORIGINAL. Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981.

Artículo 1. A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil en cualquier otra esfera.

Artículo 2

Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal objeto, se comprometen a:

- a) Consagrar, si aún no lo han hecho, **en sus constituciones nacionales y en cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la mujer** y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese principio;
- b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer;
- c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de igualdad con los del hombre y garantizar, por conducto de los tribunales nacionales o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer contra todo acto de discriminación;
- d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con esta obligación;
- e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas;
- f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan discriminación contra la mujer;
- g) Derogar todas las disposiciones penales nacionales que constituyan discriminación contra la mujer.

Artículo 3

Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, **incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno**



ADO EN MATERIA
AVO C. J. GARCIA, CON
R. JAVALA, MORELO;

desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.

Artículo 4

1. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar **la igualdad de facto entre el hombre y la mujer** no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato.

2. La adopción por los Estados Partes de medidas especiales, incluso las contenidas en la presente Convención, encaminadas a proteger la maternidad no se considerará discriminatoria.

Artículo 5

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para:

- a) Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres;

Artículo 10

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres:

CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL

Convención publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el viernes 13 de junio de 1975.

ARTICULO 1

1.- En la presente Convención la expresión "**discriminación racial**" denotará toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas.

CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER. Convención publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 16 de noviembre de 1954.

ARTICULO 1. Los Estados Americanos convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles de que goza el hombre.

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS

TEXTO ORIGINAL.

Pacto publicado en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el miércoles 20 de mayo de 1981.

Artículo 5

1. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de conceder derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos y libertades reconocidos en el Pacto o a su limitación en mayor medida que la prevista en él.
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos fundamentales reconocidos o vigente (sic) en un Estado Parte en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto de que el presente Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

Artículo 16. Todo ser humano tiene derecho en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Artículo 17

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.
- 3.

CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

TEXTO ORIGINAL.

Convención publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el martes 19 de enero de 1999

Artículo 4

Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos



IDO EN MATERIA
IVO CIRCUITO. CON
INAVACA, MORELO

regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros:

- a. el derecho a que se respete su vida;
- b. el derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral;
- c. el derecho a la libertad y a la seguridad personal;
- d. el derecho a no ser sometida a torturas;
- e. el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia;
- f. el derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley;

Artículo 14

Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá ser interpretado como restricción o limitación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o a otras convenciones internacionales sobre la materia que prevean iguales o mayores protecciones relacionadas con este tema.

Empero, esos preceptos son violentados en el precepto 65 reclamado de inconstitucional, por lo que debe inaplicarse su contenido; ya que, contraviene los derechos humanos contenidos, atendiendo a que como bien se expone en el amparo, y a lo que no se pronuncio en su integridad el órgano colegiado en la sentencia, sobre:



DO EN MATERIA
NO CIRCUITO, CON
NAVACA, MORELOS

A).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos es discriminatorio porque la expresión "discriminación contra la mujer" denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos; y tal precepto considera desigual la relación matrimonial a la del concubinato, cuando ambas figuras tienen las mismas características, y debe considerarse a esta ultima (concubinato), un estado civil de la mujer o el hombre, para no denotar distinción, exclusión o restricción, como lo que contiene el precepto que se tilda de inconvencional.

B).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos es desigual porque considera distintivamente un estado civil de una mujer casada frente a otra unida en concubinato, distinguiendo y desconociendo su estado civil social o "estatus", colocándolas en planos diversos frente a la sociedad, a la ley y ante el

Estado, en donde se da preferencia a la femenina en matrimonio a aquella que solo mantiene una relación de unidad de hecho, es decir, una unión de derecho frente a una unión de hecho.

C).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra la dignidad de la mujer porque la denigra en su persona y ante la sociedad, menospreciándola por no unirse en matrimonio, es decir, denigrándola por una relación de hecho que a la luz de la óptica de los magistrados y el legislador ordinario, consideran "moralmente prohibida", y le dan tratos diferentes cuando en sí tienen las mismas características, y que impide el libre desarrollo de la personalidad de la mujer por falta de un documento oficial, título o prerrogativa para ser considerada igual social y legalmente.

D).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra la protección de la familia, porque impide el derecho a fundar una familia teniendo la edad, y desconoce y desatiende el deber de ser protegida por el Estado y la misma Sociedad.

E).- El precepto 65 del código familiar en vigor en el Estado de Morelos atenta contra el honor de la mujer, porque deshonra, degrada y menosprecia la relación concubinaria, al grado de mantenerla en segundo plano frente al matrimonio, pues aun cuando son uniones similares con las mismas características, les dan un trato legal desigual, afectando incluso el decoro de la mujer que vive un concubinato.

Sin embargo, esta definición debe olvidarse y desatenderse al ser inconstitucional e inconvencional y debe entenderse la definición del diccionario del jurista Juan Palomar del Miguel que le define **como trato o comunicación de un hombre con su concubina**; alejándose de requisitos moralistas como que ambos cónyuges no estén casados civilmente con otra persona o no tengan otro concubinato, o que no tengan impedimento para contraer matrimonio, lo que debe superarse por esta corte que conoce del caso. Siendo aplicable al caso por similitud la siguiente tesis:

CONCUBINATO. SU RECONOCIMIENTO EN EL DERECHO MEXICANO SE DERIVA DEL MANDATO DE PROTECCIÓN A LA FAMILIA ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES LO QUE SE PRETENDE ES RECONOCER Y PROTEGER A AQUELLAS FAMILIAS QUE NO SE CONFORMAN

EN UN CONTEXTO MATRIMONIAL. Esta Primera Sala advierte que el legislador mexicano ha optado por regular a las parejas de hecho, es decir, aquellas parejas que mantienen una relación estable y continuada pero que han preferido no sujetarse a un régimen matrimonial, bajo la figura del concubinato. Por tanto, es claro que la legislación civil y familiar de nuestro país se ha decantado por reconocer efectos jurídicos concretos a una relación en la que no existe una declaración expresa y formal de voluntad para formar una vida en común -como la que existe en el matrimonio-, pero que en la realidad constituye una unión fáctica de dos personas que en última instancia conforma una familia en el sentido más amplio de la palabra. Ahora bien, es importante destacar que el hecho de que el legislador haya reconocido efectos jurídicos a este tipo de uniones de hecho, caracterizadas principalmente por un grado de estabilidad relevante, se deriva de un mandato constitucional establecido en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en la protección de la organización y desarrollo de la familia, pues lo que se busca evitar son situaciones de injusticia o desprotección sobre aquellas personas que si bien conforman una familia, no lo hacen en un esquema matrimonial. Así, es claro que el concepto constitucional de familia no puede ser interpretado desde un punto de vista restrictivo y centrado exclusivamente en familias formadas en un contexto matrimonial, sino que dicho concepto debe ser entendido desde una perspectiva más amplia, debiéndose incluir en él las situaciones de convivencia ajenas al matrimonio que desarrollan los mismos fines que éste y que, por lo tanto, **deben recibir los mismos niveles de protección.**

Amparo directo en revisión 230/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho para formular voto concurrente, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Javier Mijangos y González. Esta tesis se publicó el viernes 23 de enero de 2015 a las 9:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Tesis: 1a. VI/2015 (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. 2008255. Primera Sala. Libro 14, Enero de 2015, Tomo I. Pág. 749. Tesis Aislada (Constitucional).

Consecuentemente, se estima que tanto la sentencia reclamada como la declaración de constitucionalidad del artículo 65 del código familiar de Morelos, son contrarios a la constitución y a los

tratados internacionales invocados, porque toda norma que discrimine una relación como la de concubinato esto es diversa de la relación de matrimonio, debe inaplicarse ya que no admite reparación, ni interpretación conforme, Porque acontece que, en México, como en muchos lugares las relaciones de pareja, pueden ser con documento o **(matrimonio)**; de hecho y sin documento **(concubinato)**, estables y por el tiempo requerido; o simplemente en **"unión libre"**, sin documento, inestable, sin permanencia, sin cumplir las características del concubinato; pero que en realidad, en las tres relaciones existe una relación casi idéntica, en al que la pareja, cohabita, convive, tiene relaciones sexuales, amorosas, cariñosas, ayuda recíproca, se proporcionan alimentos, vestido, medicinas, se establece un hogar, se presentan ante la sociedad como pareja, y existe solidaridad entre ellos, de ahí que incluso la relación de "unión libre" debe reconocerse y por igual protegerse, porque en si se protege a la familia, y en esos casos, debe darse un trato igual a la mujer o al hombre que se encuentre ben estos supuestos, con algunas salvedades mínimas, y por ende, debe declarare inconvencional el artículo 65 del código familiar reclamado, y revocar la sentencia del Tribunal colegiado, por ser ilegal.



EN MATERIA
CIRCUITO
VALA, MORELO

Sobre esta línea, el precepto tildado de inconstitucional trasgrede los derechos humanos de la quejosa al no prever **el mínimo vital**, relacionado con la igualdad y la dignidad humana de la mujer concubina con la mujer casada, porque precisamente al ser el mínimo vital, entendido el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, como contrariamente lo afirmo el Tribunal Colegiado, el derecho derivado del concubinato de proporcionar alimentos al acreedor alimentista, constituye a la mujer acreedora alimentista el derecho a percibir los alimentos, y precisamente tales ingresos o prestaciones que le aseguren a la concubina la subsistencia no se verán realizados en la definición de concubinato que hace el artículo 65 del código familiar reclamado de inconstitucional, pues exige requisitos desiguales, indignos, desprotectores de la familia, como la permanencia, el tiempo de cinco años para que se constituya concubinato y sobre todo el referente a que ningún cónyuge se encuentre unido en matrimonio con tercera persona, lo que de suyo hace inexistente la figura del concubinato si no se cumplen estos requisitos, y al no existir por la definición el concubinato en una relación de hecho extramarital, entonces se violenta el derecho elemental del **mínimo vital** del que se viene hablando al no poder asegurar a la mujer concubina ingresos suficientes para su subsistencia, por concepto de pensión alimenticia del

concubino diverso obligado, porque la definición prohíbe que se constituya esa relación al no cumplirse los requisitos estratosféricos que exige en su definición.

Así, se ha señalado que el mínimo vital no debe entenderse como el derecho de la mujer o persona de contar con ingresos suficientes para la subsistencia de su persona, sino que asociado con la igualdad y no discriminación y protección de la familia, debe tenerse como el derecho de la mujer concubina de obtener de su concubinario los recursos necesarios vía alimentos que le garanticen su subsistencia, por ello en materia de derechos humanos, **El derecho al mínimo vital** descansa en la **dignidad humana**, la solidaridad, la libertad, la igualdad material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas; debiendo ser protegido dicho derecho por el estado, que tiene el compromiso de velar por la protección de las necesidades mínimas de la persona, pero no solo en cuanto a sus ingresos, a su salario, **a su bienestar alimenticio (como en la obligación alimentaria derivada del concubinato)**, a su salud, vestido, calzado, etc., sino además **va dirigido a la protección de la familia y a la dignidad humana, para garantizarle al ser humano por su condición de persona, su más elemental derecho al mínimo de vida, que cubra sus necesidades**; lo que desatiende y excluye el artículo 65 del Código Familiar supracitado, al exigir requisitos grabosos, inmoderados y degradantes en una completa desigualdad, para la existencia del concubinato que los cónyuges no estén casados, o no exista impedimento para ello, lo que en si constituye trasgresión al derecho fundamental y humano del mínimo vital, al impedir en la definición de facto que la mujer concubina no tenga acceso a los alimentos derivados d esa relación de hecho, siendo conforme al siguiente criterio adoptado en la Tesis: I.9o.A.1 CS (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época 2011316 6 de 61, Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Pag. 1738. Tesis Aislada (Constitucional), que se cita a continuación.

MÍNIMO VITAL. CONFORME AL DERECHO CONSTITUCIONAL MEXICANO Y AL INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE ENCUENTRA DIRIGIDO A SALVAGUARDAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y NO DE LAS JURÍDICAS. El derecho al mínimo vital se fundamenta en la dignidad humana, la solidaridad, la libertad, la igualdad

material y el Estado social, al considerar que las personas, para gozar plenamente de su libertad, necesitan un mínimo de seguridad económica y de la satisfacción de sus necesidades básicas. Por ende, constituye el derecho a gozar de unas prestaciones e ingresos mínimos que aseguren a toda persona su subsistencia y un nivel de vida digno, así como la satisfacción de las necesidades básicas. Ahora bien, en el ámbito internacional podemos encontrar algunas normas que incluyen el derecho al mínimo vital, aunque no con esa denominación. Así, la Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado **que le asegure, a ella y a su familia, la salud y el bienestar, en especial, la alimentación, el vestido**, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios (**artículo 25**, numeral 1); de igual manera, prevé el derecho de los trabajadores a una remuneración equitativa y satisfactoria, que asegure a la persona y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana, y que dicha remuneración debe completarse con cualquier otro medio de protección social (**artículo 23**, numeral 3). En el mismo contexto, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales contiene normas que en cierta medida recogen elementos de la prerrogativa indicada pues, por una parte, desarrolla el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, y a una mejora continua de las condiciones de existencia (**artículo 11**, numeral 1); además, establece que la remuneración de los trabajadores como mínimo debe garantizar condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias (**artículo 7**, inciso a), subinciso ii)]. Por lo que hace al derecho mexicano, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal **Constitucional** estableció, en la ejecutoria que dio origen a la tesis aislada 1a. XCVII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, mayo de 2007, página 793, de rubro: "**DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.**", que el objeto del derecho al mínimo vital **abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano**, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. De lo anterior se sigue que el derecho al mínimo vital: **I. Deriva del principio de dignidad humana**, en concordancia con los derechos fundamentales a la **vida, a la integridad personal y a la igualdad**, en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta; II. Está dirigido a los individuos en su carácter de personas físicas; III. Es un derecho fundamental no consagrado expresamente en la Carta Magna, pero que se colige a partir de la **interpretación** sistemática de los derechos fundamentales consagrados en sus artículos 1o., 3o.,



ESTADO EN MATERIA
OCTAVO CIRCUITO
GUERRERAVACA, MORELIA

4o., 6o., 13, 25, **27**, 31, fracción IV y 123 y de los derechos a la vida, a la integridad física, a la igualdad, a la salud, al trabajo y a la seguridad social, entre otros, a través del cual se garantizan los requerimientos básicos indispensables para asegurar una subsistencia digna del individuo y su familia, **no solamente en lo relativo a alimentación y vestuario, sino también en lo referente a salud, educación, vivienda, seguridad social y medio ambiente;** y, IV. **No puede entenderse como una protección económica únicamente, sino como una tutela vinculada con la dignidad de la persona, la integridad física, la vida y la protección de la familia.** Por tanto, conforme al derecho **constitucional** mexicano y al internacional de los derechos humanos, **el derecho al mínimo vital está dirigido a salvaguardar los derechos fundamentales** de las personas físicas y no de las jurídicas.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 261/2015. Astro Gas, S.A. de C.V. 13 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Edwin Noé García Baeza. Secretario: Daniel Horacio Acevedo Robledo.

Tesis: I.9o.A.1 CS (10a.). Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Décima Época 2011316 6 de 61, Tribunales Colegiados de Circuito. Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II. Pag. 1738. Tesis Aislada.(Constitucional).

Esta tesis se publicó el viernes 18 de marzo de 2016 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

0 EN MATERIA
3 CIRCUITO, CON
AVACA, MORELOS

TERCER AGRAVIO.

FUENTE DEL AGRAVIO.-La resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil numero [REDACTED] resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa [REDACTED].

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Se violan los artículos 74, 75, 76 de la ley de amparo en vigor, por interpretación y aplicación indebida del los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la carta magna en relación a los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA**

204

LA MUJER, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los tratados internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**, artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**, artículos 4 y 14.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. Es anticonstitucional e inconvenicional el artículo 65 del código familiar del Estado de Morelos e ilegal la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Decimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil numero [REDACTED], resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa [REDACTED], ya que la resolución viola la fracción IV del artículo 74 y trasgreda el artículo 75 de la ley de amparo en vigor, puesto que conforme a estos preceptos se tiene que la sentencia de amparo debe contener entre otros requisitos, las consideraciones y fundamentos legales en los que se apoye para otorgar, negar o sobreseer el amparo, y que el acto reclamado deberá apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, lo que desatendió por incompleto el Tribunal Colegiado al dictar la sentencia impugnada, al declarar inoperante el concepto de violación de inconvenicional e inconstitucional del precepto reclamado de inconstitucional en cuanto atenta contra el derecho del mínimo vital, al declararlo inoperante, al sostener que el precepto no trasgreda ese derecho porque cree que el precepto lo que regula es la definición del concubinato, pues precisamente esta definición es la que trasgreda el derecho al mínimo vital porque al exigir requisitos en desuso como la permanencia, el tiempo de cinco años, y que no exista matrimonio de alguno de los concubinos con tercera persona o impedimento para ello, impide de facto que se constituya la existencia de la figura de concubinato en una relación extramarital, impidiendo por lo mismo de facto que la mujer concubina contrario a lo que sucede con la mujer casada, por ese solo hecho, pueda acceder a los alimentos, esto es a obtener no del estado, sino de el obligado alimentista, los recursos necesarios para la subsistencia.

En este aspecto es errónea desligar los derechos humanos de igualdad de las personas, de no discriminación, de dignidad

254

humana, de protección de la familia, del honor en relación al mínimo vital, en este tema de concubinato, pues para ello se debe abordar en su conjunto el estudio y análisis de tales conceptos que son suficientes y operantes para declarar inconstitucional este precepto impugnado, así como la sentencia reclamada para su inaplicación al caso y por ende la protección de la justicia de la unión a la impetrante, a fin de que se respeten sus derechos humanos y constitucionales indicados, ya que la definición de concubinato que prevé este precepto trasgredir en su conjunto estos derechos inherentes a la persona concubina, frente a la casada, por ese solo hecho, impidiendo el desarrollo de sí misma, de la familia y de asegurarle y garantizarle el mínimo vital, pues no contara con ingresos para su subsistencia, derivados del concubinato, al definirlo con exigencias que de suyo hacen imposible su existencia, cuando en la realidad dicha relación extramarital es aceptada por la sociedad de un modo igual sin distinción, pues solo es la ley la que hace tal situación. y por

CUARTO AGRAVIO.

FUENTE DEL AGRAVIO. -La resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil número **682/2017**, resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa **MARTHA ELVIA FLORES VALLE**.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Se violan los artículos 74, 75, 76 de la ley de amparo en vigor, por interpretación y aplicación indebida de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la carta magna en relación a los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los tratados internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**, artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**, artículos 4 y 14.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. Es anticonstitucional e inconvenicional el artículo 65 del código familiar del Estado de Morelos e ilegal la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil [REDACTED], resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa [REDACTED] en cuanto a que declara inoperante el planteamiento de la temporalidad para que exista el concubinato, que define el artículo impugnado de inconstitucional, al prever que al relación de un hombre y una mujer por el tiempo de cinco años, y su permanencia, porque podría ocurrir que existan distanciamientos, o separaciones temporales como ocurre en el matrimonio, argumentando que el cuestionamiento de la porción normativa del artículo 65 del código familiar para el Estado de Morelos, no le fue aplicada, a saber la relativa a que para la configuración del concubinato se deba haber cohabitado por cinco años, cuando dice que de la lectura de la sentencia impugnada se advierte que tal circunstancia no fue materia de pronunciamiento por la autoridad responsable y por ello lo declara inoperante, sin realizar el análisis de tales planteamientos, lo cual violenta el artículo 75 en relación al 74 de la ley de amparo en vigor al no apreciar el acto tal como aparece probado y sin que exponga los fundamentos y consideraciones necesarias y suficientes por las que estimo negar el amparo, esto es al no entrara al análisis de los planteamientos sobre el particular cuando tenía la obligación legal de pronunciarse sobre estos planteamientos.

ERIA
10. 000
00000

Esto porque la exigencia de cinco años de duración de la relación en pareja, y **cuando uno de los concubinos tenga impedimento para casarse o bien que se encuentre casado**, pues en este caso por consecuencia el concubinato no existe, lo cual como se ha mencionado es inconvenicional, pues atenta contra la dignidad, honor e igualdad de la mujer colocada en esa situación de hecho, al no reconocerle su derechos a contar con un estado civil de concubinato y reconocimiento por la sociedad, la ley y el Estado, de una relación extramarital, solo por una supuesta moral colectiva, desatendiendo que la relación de hecho del concubinato, genera derechos, por mal mujer concubina, una vez terminado o dentro del concubinato tiene derecho a los alimentos, entre otros, derechos que deben ser tratadas las mujeres que violen en concubinato como iguales y que debe desaparecer en el precepto 65 cuestionado la exigencia de que para reconocer la existencias del concubinato, deben estar los concubinos libres de matrimonio o no tener impedimento para contraer matrimonio, para

cumplir con la exigencia social y el respeto a los derechos humanos y la protección de la familia.

Ello porque atendiendo al particular, en donde la relación de concubinato entre la quejosa [REDACTED] con el tercero interesado existió previo al matrimonio de este último con tercera persona, que mantuvo oculto, pero que fue posterior al inicio de la relación de concubinato que dura por más de cinco años, debiendo haber analizado la temporalidad relacionada con el caso concreto conforme a los artículos 74 y 75 de la ley de amparo, así como la permanencia, es decir que no son necesarias en la definición de concubinato que contiene el precepto reclamado, habida cuenta quien cada caso particular tiene sus propias particularidades, y en el presente, tal temporalidad si no fue abordada por la sala responsable, no por ello deba declararse al planteamiento inoperante, por su no aplicación, dado que atendiendo a la mecánica de los hechos en que se desarrolló la relación de la quejosa con el tercero interesado, que fue previa al matrimonio, debió analizarse este planteamiento, pues precisamente fue la interpretación de la definición del artículo 65 cuestionado, en la que se basó la responsable al confirmar la sentencia de primer grado, que al igual se basó en la definición del concubinato, para descartar en sentencia sin resolver el asunto, la falta de legitimación activa en la actora hoy quejosa y por ende, improcedente la acción alimentaria.

EN COMPLETACION DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, EN LA ACCION DE ALIMENTOS.

Para estimar que debieron analizarse los conceptos de violación relativos al mínimo vital, y a la duración del concubinato de cinco años, la permanencia o cohabitación que ambos sean libres de matrimonio y sin impedimento para contraerlo, debe traerse al caso los antecedentes del asunto familiar de alimentos que ejercito la actora hoy quejosa ante el órgano jurisdiccional competente el cual resolvió sin entrar al fondo del asunto, la falta de legitimación de la actora en sentencia definitiva, teniendo estos antecedentes:

[REDACTED], **quejosa hoy revisionista**, demandando en primera instancia, la acción de **“alimentos definitivos”**, derivados de una relación de concubinato, formándose el caso civil [REDACTED] del índice del Juzgado primero civil en materia familiar y de sucesiones de primera instancia del noveno Distrito judicial del Estado de Morelos, en contra de [REDACTED] en donde el Juez de Primer grado pronuncio sentencia el 20 de enero del 2017, resolviendo en el SEGUNDO punto resolutive, declarar **LA FALTA DE LEGITIMACION DE LA ACTORA**, por considerar no demostrada la

relación de concubinato con las pruebas documentales ofertadas por la actora, porque adujo que no se acreditó previamente en juicio diverso, la relación de concubinato, y por ende siendo una relación de hecho debió demostrarse en otro juicio y ante otra autoridad; resolución en contra de la cual se interpuso recurso de apelación que una vez analizados los diversos agravios planteados en un único agravio, se sostuvo que si estaba demostrada dicha relación de concubinato, que debió analizarse en sentencia definitiva las acciones y excepciones y valorar las pruebas para determinar que fueron suficientes y eficaces para demostrar que en el caso civil, si estaba demostrada la acción, y debió condenarse al mandado a los alimentos definitivos que se le reclamó fundándose en la relación de concubinato que se demostró; por lo que, la sala responsable, dictó sentencia en Segunda Instancia, en la que omitiendo analizar todos y cada uno de los conceptos de agravio, se pronunció sobre todo por la inexistencia de la relación de concubinato en los términos de la descripción y exigencia del numeral 65 del Código Familiar que hoy se reclama de inconstitucional, y el cual el Tribunal Colegiado en materia Civil, del Décimo Octavo Circuito, en este amparo en revisión declara constitucional y convencional infundadamente el artículo 65 del código familiar del Estado de Morelos, trasgrediendo los derechos humanos y fundamentales de la quejosa.

EN MATERIA
CIRCUITO DEL
VACA, MORELOS

QUINTO AGRAVIO.

FUENTE DEL AGRAVIO. -La resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado en materia Civil del Décimo Octavo Circuito en el Estado de Morelos, en el amparo directo civil número **682/2017**, resuelto en sentencia de fecha 16 de abril del 2018, promovido por la quejosa MARTHA ELVIA FLORES VALLE.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.- Se violan los artículos 74, 75, 76 de la ley de amparo en vigor, por interpretación y aplicación indebida de los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 de la carta magna en relación a los preceptos 1, 2, 3, 4, 5, 10 de la **CONVENCION SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER**, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el martes 12 de mayo de 1981; de los tratados internacionales como **CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE LA ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION RACIAL**, artículo 1; **CONVENCION INTERAMERICANA SOBRE CONCESION DE LOS DERECHOS CIVILES A LA MUJER**, artículo 1; **PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLITICOS**,

artículos 5 y 17; **CONVENCION INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER**, artículos 4 y 14.

CONCEPTOS DEL AGRAVIO. En otro aspecto, el Tribunal Colegiado en la sentencia reclamada y después de hacer el análisis de la constitucionalidad del artículo 65 del Código Familiar del Estado de Morelos, establece que lo alegado por la quejosa en el primer concepto de violación en diverso apartado, en el sentido de que aun cuando el demandado tercero interesado se encontrara casado con tercera persona, dicha circunstancia no traía como consecuencia que la relación de concubinato no existiera, pues la relación matrimonial fue oculto y posterior al concubinato, y que la sala omitió valorar los medios de convicción ofertados en juicio Probanzas con las que se acreditó la relación de concubinato previo al matrimonio, declarando el concepto de violación inoperante.

Aduciendo que lo estima así, "pues aun y cuando resultaran fundados los conceptos de violación de la quejosa, se estimara que con los medios de prueba que aportó al juicio se demuestra la existencia de una relación de hecho, a nada práctico conduciría concederle el amparo solicitado; ya que, dadas las particularidades del caso en estudio, ello no variaría el sentido del fallo impugnado al resultar improcedente la acción de alimentos intentada por el impetrante.

Explica que, los artículos 35, 36 y 46 del código familiar del Estado de Morelos, señalan (los transcribe), la obligación de dar alimentos de los que derivan del matrimonio, del concubinato, del parentesco o por disposición de la ley (artículo 35); que tiene el carácter de acreedor alimentista toda aquella persona que no pueda bastarse a sí misma, y es deudor alimentista el obligado a proporcionar alimentos (artículo 36); y, que los alimentos deben ser proporcionados a la posibilidad del que deba dálos y a **la necesidad del que deba recibirlos** (artículo 46). Para más adelante señalar que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos entendiendo por este aquella situación que en la que puede encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, y cita la jurisprudencia de la suprema corte; para establecer que la actora con las pruebas que oferto y que valora, analiza y desestima el tribunal colegiado en el amparo, ajeno al análisis de la sala responsable, no se demostró el estado de necesidad de la acreedora alimentista como uno de los presupuesto de la procedencia de la acción, enunciando las pruebas aportadas en juicio y con las cuales dice no se acreditó ese estado de necesidad ni con las pruebas confesional a

20

cargo del demandado [REDACTED], ni con la prueba testimonial ofertada por la actora, ni con los informes del Instituto Mexicano del Seguro Social y de la Institución bancaria, ya que no demuestran que no pudiera valerse por sí misma aduciendo que incluso la testimonial y el informe le perjudican porque se demuestra que la actora trabaja en la Secretaría de desarrollo sustentable del Estado, que percibe [REDACTED] mensuales.

Así refiere el Tribunal que con la vista desahogada por la actora en el escrito de 1 de abril del 2015, en donde señalo : “que el lugar donde trabajo como secretario que lo mes en la secretaría de desarrollo sustentable del Gobierno del Estado de Morelos, percibo un sueldo irrisorio de [REDACTED] mensuales, tal y como lo acredito con el recibo de pago de la segunda quincena del mes de marzo del 2015, de donde tengo que pagar, mis alimentos, transporte, luz, agua, gas, pensión rentística del departamento que tome en arrendamiento.

Para aterrizar diciendo que a nada practico conduciría analizar los conceptos de violación relativos a que con las probanzas se demostró una relación de hecho con su contraparte, “pues aun cuando ese extremo se llegara a acreditar”, al no haberse demostrado con los medios de convicción aportados al juicio natural el estado de necesidad de la acreedora alimentista, dicha circunstancia por si sola hace improcedente la acción de alimentos intentada de ahí la inoperancia.

Estas afirmaciones del Tribunal Colegiado, son ilegales e inexplicables porque las reglas del juicio de amparo, obligan al órgano de control constitucional a “analizar o apreciar el acto reclamado tal y como aparezca demostrado en las constancias de autos ante la autoridad responsable”, sin que deba rebasar su análisis a argumentos, que no fueron expuesto en la sentencia reclamada porque ello trastoca las reglas del procedimiento de amparo, porque el artículo 75 de la ley de la materia señala que:

“ARTICULO 75.- En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciara tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable...”

Precepto que violenta el órgano de amparo pues en las sentencia de amparo como la impugnada, no es dable bajo ningún motivo y por ninguna circunstancia suplir los fundamentos de la sentencia reclamada, esto es abordar cuestiones o análisis de temas que no fueron

adoptados por la autoridad en la sentencia, ya que el acto reclamado deberá apreciarse tal y como aparezca probado, esto es que si en la sentencia se abordan análisis sobre la improcedencia de la acción por **FALTA DE LEGITIMACION EN LA ACTORA**, como en el caso, por la no demostración del concubinato, necesariamente que el órgano de control constitucional debió de abordar única y exclusivamente el tema sobre los fundamentos de la sentencia reclamada, conforme a las constancias de autos, para resolver si es constitucional o no la sentencia reclamada, pero no le es permisible bajo las reglas del juicio de amparo, suplió los fundamentos de las responsables en las sentencias a adoptar criterios y razonamientos ajenos a los expuestos por las partes, esto es analizar si los conceptos de violación son fundados o no o inoperantes, en relación directa a los razonamientos expuesto en la sentencia pero no tiene facultades de forma alguna para abordar razonamientos que no fueron materia de análisis en la sentencia reclamada en amparo directo, pues al hacerlo viola las reglas del juicio de amparo.

En este concepto, la sentencia de amparo va más allá del análisis realizado por la sala responsable, pues al resolver el asunto en la sentencia en el punto resolutivo primero que confirma la sentencia de primer grado únicamente resolvieron la **FALTA DE LEGITIMACION DE LA ACTORA**, bajo el argumento de no haberse demostrado "el concubinato", sin que expusieran tanto el juez natural como el tribunal de alzada, argumento alguno en torno a los elementos o presupuestos de la acción como el estado de Necesidad de la acreedora alimentista que abordo el Tribunal colegiado en forma indebida, pues una cosa es **FALTA DE LEGITIMACION** y otra **PRESUPUESTO** de la acción como el Estado de necesidad del acreedor alimentista, y si la responsable en la sentencia reclamada no abordó el análisis de estos presupuestos, solo se refirió a la inexistencia del concubinato, solo se debió analizar este tema bajo esta óptica, mas no en supliendo los fundamentos de la acción, pues incluso el órgano colegiado estimo preceptos dl código familiar que ni siquiera fueron citados por la autoridad responsable.

Entonces, tenemos una sentencia arbitraria, porque el Tribunal Colegiado si bien, puede analizar la sentencia reclamada, y valorar las pruebas aportadas del juicio, no puede introducir elementos y razonamientos ajenos a los planteados y resueltos por la responsable, es decir no puede variar ni alterar los fundamentos de la sentencia, solo debe limitarse a señalar si esos fundamentos de la resolución reclamada son constitucionales o no, pero sin suplir o introducir fundamentos de la sentencia reclamada, de tal forma que se convierte en parte contraria al

216

quejoso, distendiendo su función de control constitucional, ya que solo debe apreciar el acto tal y como se encuentre probado, esto es que solo debe atender valorar y resolver los fundamentos y motivos de la sentencia reclamada en relación con los conceptos de violación.

El Tribunal Colegiado al dictar la sentencia reclamada violenta los artículos 74 y 75 de la ley de amparo, pues se coloca como autoridad responsable y suple sus fundamentos o razones y motivos para perfeccionar la violación a los derechos fundamentales, ya que se va por la tangente al margen de los lineamientos de la ley de la materia, porque no aprecia el acto como fue probado ante al responsable en juicio, ya que debió analizar los fundamentos de la sentencia en relación a los conceptos de violación planteados en el amparo, y determinar si son fundados o no para conceder la protección federal o negarla, pero sin introducir fundamentos que no contiene la sentencia reclamada como el estado de necesidad que refirió no demostró la actora hoy revisionista, pues primero la responsable confirma la sentencia de primer grado porque expuso que no se demostró el concubinato y por ende NO EXISTIO LEGITIMACION EN LA PARTE ACTORA, sin que se ocupara de analizar citar los preceptos de la necesidad de percibir alimentos en la catrera, ya que jamás se expuso que no existiera acredita el estado de necesidad de la actora y que este fuera un presupuesto de la acción, como erróneamente lo hizo el tribunal al colegiado.

Esta suprema corte de justicia de la Nación debe indicar a sus tribunales colegiados, que en materia de amparo directo, los órganos colegiados no deben ni pueden introducir fundamentos en las sentencias, para suplir sus razonamientos y colocarse en parte complaciente, pues la función de control constitucional los obliga a analizar las sentencias en sus fundamentos en relación a los conceptos de violación para determinar si son constitucionales o no pero no suplir los razonamientos y de tal forma declarar constitucional la sentencia como en el caso, pues el órgano jurisdicción de segunda instancia descansó el fallo en LA FALTA DE LEGITIMACION DE LA ACTORA por no acreditar la relación de concubinato, ni siquiera abordó el tema del estado de necesidad al que se refiere el órgano colegiado y en el que funda la negación, cuando no fue citado por la responsable.

Pero lo que es más delicado, que este hecho no fue materia de la litis, es decir, ni siquiera fue acción en la contienda, ni defensa o excepción por el demandado, ya que ni en la contestación de la demanda ni en las excepciones se planteó la falta de presupuesto de la acción alimentaria de estado de necesidad, para que siquiera pudiera analizarse por el órgano de amparo, ya que al contestar la demanda no se planteó como excepción o defensa y por ende no fue materia de la litis, y si bien la ley de amparo permite la suplencia de la queja en los casos de la familia, no significa que se pueda suplir e introducir fundamentos de una sentencia cuando se reclama en amparo de tal forma que perfecciona la violación a las garantías del quejoso como en el caso acontece por el órgano colegiado. De ahí la violación a la ley de amparo a los artículos 74 y 75.

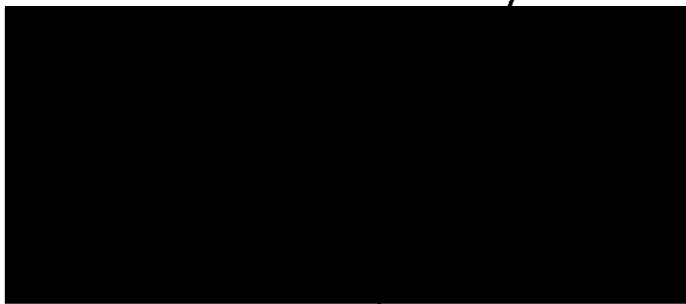
Bajo esta lógica, también el órgano colegiado equivocadamente sostiene que también es inoperante el argumento de la quejosa en cuanto a que la sala responsable desprendió bajo presunción un concubinato entre el tercero interesado con tercera persona por exhibir las actas de nacimiento, relación por más de veintiséis años, pues como lo señalo la sala el concubinato debe "acreditarse" y no "presumirse", que aun cuando se concediera la tutela federal para que la autoridad prescindiera de tal argumento, en nada variaría el sentido de la sentencia impugnada porque subsistiría el fundamento del fallo al que adujo como la existencia de un "impedimento para que pueda configurarse el concubinato, a saber, que el demandado este unido en matrimonio con tercera persona y lo cual si quedo debidamente acreditado con el acta del registro civil que oferto aquel; lo que se hace necesario establecer que al igual "la sentencia reclamada, no tiene se fundamentó, pues se refirió al hecho de que un concubino estuviera unido en matrimonio no del impedimento para el concubinato, y precisamente es la inconventionalidad e inconstitucionalidad de este requisito planteado con anterioridad, en la definición del concubinato que contiene el artículo 65 del código familiar del estado de Morelos, la que se desprende de esa literalidad y que se estima se debe inaplicar, pues exigir en el concubinato que no esté casado uno de los concubinos con tercera persona o que exista impedimento para el concubinato, se considera discriminatorio para la mujer concubina frente a la mujer casada, y atenta contra su dignidad humana y la protección de la familia, pues califica a las mujeres según su relación, cuando no debe existir tal requisito dado que como se planteó en la demanda de amparo, los tiempos modernos, y socialmente aceptados en nuestros días no distinguen relaciones con título y sin él, ni la existencia de una de dichas relaciones por excluir el matrimonio al concubinato, ya que bien pueden coexistir un matrimonio entre dos cónyuges y uno de ellos una relación de concubinato con tercera persona en un mismo tiempo sin excluir al concubinato por el hecho de existir el matrimonio en un concubino, de ahí que debe abandonarse el criterio moralista y en desuso del concubinato para darle la definición de nuestros días, atendiendo a los derechos humanos, dando igualdad a la mujer concubina en equivalencia con la casada.

**POR LO EXPUESTO Y FUNDADO A USTED C.
PRESIDENTE DE ESTA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION,
ATENTAMENTE PIDO SE SIRVA:**

UNICO. - Tenerme por presentada, en los términos de este escrito, **interponiendo demanda de amparo directo**, en contra de las autoridades y actos reclamados, que he dejado precisados, remitir los autos as la superioridad para la resolución del amparo. **Por solicitando la suspensión del acto reclamado**, debiendo concederse como tal por ser procedente conforme a derecho.

PROTESTO LO NECESARIO

CUERNAVACA, MORELOS., A 25 DE MAYO DE 2018



EN MATERIA
CIRCUITO, CON
VACA, MORELOS

A large handwritten checkmark is drawn across the lower half of the page.

estafeta®

Avenida José Vasconcelos No. 105, Piso 4, Col. Hipódromo Condesa,
Deleg. Cuauhtémoc, C.P. 06170, México, Ciudad de México
Teléfono: +52 (55) 52 42 91 00. R.F.C. EME880309SKS Tipo 0009



Código de Rastreo: **2871252630**

CONFIRMACION B015015556-24A501871651

Documento 3600213502
000010

01 KGS

REMITENTE:

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo
Circuito. Calle Francisco Leyva num. 3, Centro.
Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000, México

CONTRATO: CJF17001

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION; PINO SUAREZ NO. 2, CENTRO, CUAUHTEMOC,
C.P. 06065, PISO/PUERTA: 1/2009, CIUDAD DE MEXICO.
Ref. [REDACTED]

Exp. 133/2015, Original y copia de escrito de agravios y un disco
compacto.

GARANTIA 11:30 A.M. CO



B015015556-24A501871651

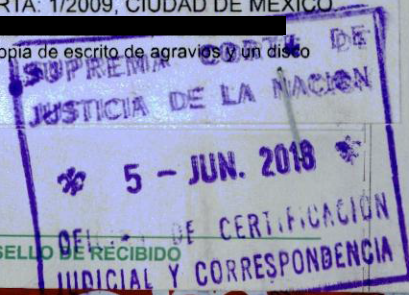
REMITENTE:

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo
Circuito. Calle Francisco Leyva num. 3, Centro.
Cuernavaca, Morelos. C.P. 62000, México

CONTRATO: CJF17001

SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.
SEDE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACION; PINO SUAREZ NO. 2, CENTRO, CUAUHTEMOC,
C.P. 06065, PISO/PUERTA: 1/2009, CIUDAD DE MEXICO.
Ref. [REDACTED]

[REDACTED] Original y copia de escrito de agravios y un disco
compacto.



ACU

FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

DEL JEFES DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

estafeta.com
CONDICIONES DEL CONTRATO DEL ENVÍO ESPECIFICADAS EN LA FACTURA
CARTA PORTE

PM 04/17

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 2003549

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

| | | | | | |
|------------------------|--|---|--------------------------------|----|-------------|
| Firmante | Nombre: | GUADALUPE ROCIO PEREZ MAQUEDA | Estado del certificado: | OK | Vigente |
| | CURP: | PEMG820305MHGRQD08 | | | |
| Firma | Serie del certificado del firmante: | 706a6673636a6e0000000000000000000000eeaa | Revocación: | OK | No Revocado |
| | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 06/06/2018T14:29:35Z / 06/06/2018T09:29:35-05:00 | Estatus de firma: | OK | Valida |
| | Algoritmo: | SHA256/RSA_ENCRYPTION | | | |
| | Cadena de firma: | 2d c9 5b 92 46 2f 97 3b 6f 9c 08 12 00 e3 e5 7d 7c 00 13 c6 1a 5d 81 e3 0b ac 0f 21 a3 6c 0d 8e 26 c0 b1 c8 0f 5d 3b 1f b0 7f 99 f1 4a 51 1c 0a ec 47 a7 48 85 96 8f eb bb f8 aa b7 c7 a2 fb 75 ef 2f ec a4 58 81 9b f4 ed 93 9c da f9 48 df 15 f0 20 6d 65 4c 75 1d 42 a4 6f 8e 3a 35 35 99 4f 42 11 c1 3b af 6b 8f 11 56 4e ed 48 fa a1 ea 7b 73 21 8f 7b 90 17 af 49 df d4 fe f5 ee d2 f2 53 0f aa f9 42 69 3c 85 62 63 d5 49 58 c2 47 76 e6 7c 4f ca ba 58 03 1a 86 95 41 6f f7 c0 f6 e0 6d 59 3b ea 4a 3c 2a 54 ce 61 8f 6e c6 b0 60 d0 ad 68 3b d5 0f 29 1d 43 ef aa 54 2c 39 3b 95 8d 19 b8 89 37 ad 81 1e 3d ab 91 96 c8 df 5f 92 4f e2 03 1b 0d d1 c3 fa d7 50 92 57 3b 64 d1 18 86 4f cc 06 a4 40 d4 9d d9 50 d8 f0 f6 52 e9 1f 62 5e 1c 3f c3 e1 b1 64 b5 c3 87 19 18 6d 86 11 b5 a0 | | | |
| Validación OCSP | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 06/06/2018T14:29:36Z / 06/06/2018T09:29:36-05:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta OCSP: | OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Emisor del certificado de OCSP: | AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Número de serie del certificado OCSP: | 706a6673636a6e0000000000000000000000eeaa | | | |
| Estampa TSP | Fecha: (UTC / Ciudad de México) | 06/06/2018T14:29:35Z / 06/06/2018T09:29:35-05:00 | | | |
| | Nombre del emisor de la respuesta TSP: | TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Emisor del certificado TSP: | AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación | | | |
| | Identificador de la secuencia: | 2006309 | | | |
| | Datos estampillados: | 27B8BD9E59D943ADB299200DB4CEB81CA3623ECC | | | |